

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Florentino Ramirez, como apoderado sustituto del Presbítero D. José María Orihuela, contra los procedimientos del ciudadano jefe de Hacienda de Guanaxuato.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el ciudadano Florentino Ramirez, como apoderado sustituto del Presbítero D. José María Orihuela, solicita que la justicia federal lo ampare contra la Jefatura de Hacienda del Estado, cuya oficina le ha librado dos órdenes de pago por los réditos del capital de dos mil pesos que reconocian unas fincas de la propiedad del padre Orihuela, sitas en la calle de Alonzo de esta ciudad, y cuyo capital, sin los réditos, redimió el ciudadano Lic. Andrés Tovar.

El quejoso funda su peticion de amparo en la parte 1ª, artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pretendiendo, que el acto de que se queja viola en perjuicio de su apoderado la garantía de la propiedad que otorga la Constitucion; es de suponerse, que la garantía que se invoca es la consignada en el artículo 27 del pacto federal, aun cuando no se cita en el escrito del solicitante.

Varias son las razones que el peticionario alega para pretender que no debecobrárselo y que no es deudor de los réditos por cuyo importe lo amenaza de ejecucion la Jefatura superior de Hacienda; mas como no sea de la competencia de este juzgado el resolverlas, por estarle prohibido expresamente ingerirse en las funciones que se ejerzan en uso de la facultad coactiva, segun se expresa claramente en el artículo 18 de la ley de 20 de Enero de 1837, este ministerio fiscal se desentiende de ellas, para ocuparse en

general de la inoportunidad é improcedencia del recurso iniciado.

El artículo 1º de la ley de 20 de Enero, citada arriba, no deja duda sobre la autorizacion que la Jefatura de Hacienda tiene para ejercer la facultad coactiva; autorizacion que ejerce bajo la garantía pecuniaria que el jefe de la oficina ha otorgado al gobierno. En el uso, pues, de esta facultad incontrvertible y lícita, el funcionario antes citado inició al deudor, que llegado el caso le aplicaria la ley, en la parte que manda asegurar el adeudo, siempre que en el término perentorio de cinco dias no se presentase á hacer el pago.

Veamos ahora, supuesta la autorizacion del jefe de Hacienda, si al tratar de ejercer en el caso la facultad coactiva, se ha separado en algun punto de las condiciones y forma que establece la ley.

Para evitar duda sobre los límites á que se sujeta la facultad coactiva, dice la ley que queda citada, (artículo 2º,) se declara: que solo se entenderán por contenciosos aquellos puntos en que fundadamente se dude sobre la aplicacion de la ley al caso particular que se verse, ó en que sean forzosas las actuaciones judiciales, etc.; pero ni la Jefatura de Hacienda dudó de la aplicacion de la ley, al caso, ni creyó necesarias, como no lo eran, las actuaciones judiciales. No dudó de la aplicacion de la ley, porque segun su informe, el crédito cuyo cobro trataba de hacer, tenia todas las condiciones requeridas en el artículo 4º de la ley que establece la facultad coactiva, para hacer uso de esta última llegado el caso. No creyó tampoco, ni lo podia creer, que las actuaciones judiciales fueran necesarias, porque la parte deudora no hacia mas que negar el adeudo y contradecirlo sin fundamento alguno, caso previsto en la parte final, artículo 2º de la ley tantas veces citada de 20 de Enero de 1837, y resuelto en el mismo artículo.

No porque se ha dicho que la contradiccion del deudor carecia de todo fundamento, el funcionario que suscribe se vá á desen-

tender de las razones que la parte quejosa aduce, como de mayor peso para fundar el recurso, y pretender que se enerven las facultades de que la Jefatura de Hacienda ha querido hacer uso para obligarlo á satisfacer su adeudo; consisten éstas, en la no existencia del adeudo y en la falta de liquidación que se le atribuye por haberse cobrado una cantidad y despues otra distinta, segun se hace constar de las comunicaciones que acompaña y corren á fojas 6 y 7. El Promotor fiscal, al tomar en consideración estas esculpaciones, hará presente al juzgado como no tiene fundamento alguno, protestando siempre, que por justificadas que apareciesen, no es un juicio de amparo donde se pueden calificar, ni resolverse sobre la fuerza que puedan tener para que en su virtud se aplique ó no se aplique la facultad coactiva.

La Jefatura de Hacienda no podrá tener duda sobre la existencia del adeudo, porque segun dice en su informe, y segun confiesa en su escrito el representante del padre Orihuela, éste confesó el adeudo del capital y consintió en pagarlo; así consta de la comunicacion del padre Sein, cuya copia testimonial corre á fojas 22. Es de advertir, que aunque el actual representante del padre Orihuela, habla de una transaccion con el Lic. Tovar, esta transaccion se refiere al incidente que lo promovió sobre preferencia de derechos á la adjudicacion del capital, pero nunca contradijo la existencia de éste, y antes bien la confiesa nuevamente en el párrafo 1º de su escrito de peticion de amparo.

Si, pues, ni el padre Orihuela ni sus representantes han hecho objecion alguna sobre la existencia de la imposicion que reportaban las fincas mencionadas, ¿cómo pueden admítirseles las que hacen para no pagar los réditos que el expresado capital debió producir? Verdad es que no repugna el que se debiera el capital y que no obstante, se hubiesen pagado los réditos causados desde la fecha de la nacionalizacion de bienes eclesiásticos, pero aparte de que

esta justificacion no procede bajo ningún aspecto en un juicio de amparo, no es siquiera de presumirse, supuesto que la adjudicacion que se hizo al Sr. Tovar, tuvo origen del denunció que hizo éste de la existencia del capital, circunstancia que arguye el no pago de los réditos, pues mal pudo cobrar el fisco los rendimientos de un capital de que no tenia noticia alguna.

Vamos al punto de liquidacion en que se fija el peticionario mas detenidamente, y en el cual parece haber vaciado sus mas fuertes razonamientos para concluir que no puede cobrárselo con la facultad coactiva.

“Ningunas providencias coactivas tendrán lugar sino tratándose de deudas líquidas, como son las de alcances que ya lo estén, etc.” Este texto del artículo 4º de la ley sobre facultad coactiva, tantas veces citada, ha sido invocado por la parte actora, citándolo en el cuerpo de su escrito con alguna repeticion, para deducir de aquí lo que nadie podrá ponerle en duda, es decir, que sin previa liquidacion no puede procederse á hacer uso de la facultad coactiva; pero este principio, que este ministerio fiscal no contradice en modo alguno, no es sin embargo aplicable al caso que motiva este juicio.

En el concepto del funcionario que suscribe, hay diferencia y muy notable entre estar un adeudo ilíquido, y haber padecido un equívoco al hacerse la liquidacion. En el primer caso, es indudable que obrando la Jefatura de Hacienda con conciencia cierta sobre su ignorancia del importe del crédito no hubiera podido, sin cometer un atentado, hacer uso de la facultad coactiva; no así en el segundo, pues habiendo procedido, segun manda la ley á liquidar el crédito, ya con ello dejó cumplida esta condicion indispensable, sin que su error que debe suponerse involuntario, pueda ser causa, como ha sucedido con la suspension del acto reclamado, de que se le enervan y pongan trabas á sus facultades legales.

Los efectos que se producirían en uno y otro de los casos supuestos, serian distintos

necesariamente, pues si en el primero podía pedirse en el juicio y ante la autoridad correspondiente, la nulidad de la ejecución, en el segundo caso, no procedía mas que la rectificación del error, pudiendo en ambos exigirse al funcionario ejecutante la responsabilidad que cupiera en el caso.

Los recursos de amparo, por razón de su naturaleza, así como por los efectos disolventes que pueden producir con el menor ensanche que se les otorgue, deben limitarse á los casos, muy estrictamente, que lo expresan las leyes. En el presente juicio, el fundamento que real y positivamente se ha hecho valer, y el punto sobre que el abogado contrario ha detenido su estudiosa imaginación es: no la violación de una garantía constitucional, sino el error cometido en una formalidad, á que sin embargo se le dió cumplimiento, de las exigidas en la ley de 20 de Enero de 1837.

Dos son en resumen los requisitos que esencialmente se exigen por la ley para que el funcionario á quien compete, cobre un adeudo en uso de la facultad coactiva, á saber: que esté satisfecho de que por cualquier título ó derecho se deba algo á la Hacienda pública, y que una vez cerciorado, proceda á liquidar el crédito, si no lo estaba. Cumplidos estos requisitos, como lo han sido en el presente negocio, la Jefatura de Hacienda, en vez de obsequiar el pedido que le hacía el deudor para que remitiera el expediente al Juzgado de Distrito, debía proceder, como procedió por sí misma, á tomar las providencias necesarias, con total inhuición de las autoridades judiciales y de cualquiera otra, según se lo previene la ley que trató de aplicar, en su artículo 3º.

Sentados los hechos anteriores, y demostrado hasta la evidencia el derecho y las facultades con que la Jefatura de Hacienda obró al intentar asegurar al adeudo del padre Orihuela, no se puede comprender cual sea la garantía violada por la que pueda invocarse el amparo de la justicia federal. El cobro de un adeudo fiscal, cierto y lí-

quido, hecho por autoridad competente, y en uso de facultades legítimas, no es mas que el uso de un derecho, la aplicación de una ley, y nunca podrá considerarse como una ocupación de propiedad, que es lo que se prohíbe en el artículo constitucional.

Por todo lo expuesto, el Promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado de Distrito se sirva decretar: 1º que la justicia de la Union no ampara ni protege al Presbítero D. José María Orihuela contra el acto de aseguramiento que trata de ejercer la Jefatura de Hacienda, porque no hay violación alguna de garantía que agravic al solicitante: 2º que éste ha incurrido en la multa de que habla el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Guajuanato, Enero nueve de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Gener J. de Velasco.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Guajuanato, tres de Febrero de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el ciudadano Florentino Ramirez, como apoderado sustituto del Presbítero D. José María Orihuela, contra los procedimientos de la Jefatura de Hacienda del Estado, en lo relativo al cobro que esta oficina pretende hacer, por medio de la facultad coactiva, de los réditos que han sido denunciados, de la capellanía de dos mil pesos que reconocen las casas de la propiedad del citado Presbítero, que están ubicadas en el callejón de los Arcos y calle de Alonzo de esta capital; y considerando: que la garantía que el quejoso supone violada, es la de la propiedad, fundándose en que el denuncia no debió admitirse, por ser ilegítimo y porque nada debe el interesado, y en que el adeudo no está líquido; considerando: que el primero de los indicados fundamentos constituye una cuestión agona

de este juicio porque afecta derechos de persona que no ha litigado y versa sobre un asunto no debatido, cuya cuestion, mientras no esté decidida en el juicio que corresponde y por autoridad competente, no puede de ninguna manera aducirse como prueba de la violacion de una garantía individual; considerando, que el segundo de los fundamentos arriba expresados ha dejado de subsistir despues que la Gefatura de Hacienda presentó, con su informe justificado, la liquidacion que obra á fojas 26 y conforme á la cual ha manifestado que se propone cobrar los réditos adeudados, debiendo en tal virtud tenerse por formalmente revocadas las dos comunicaciones de diez y veintiuno de Diciembre anterior, que dieron origen á estas actuaciones; considerando que aun en el caso de no ser exacta y equitativa la liquidacion mencionada, no procede el amparo, porque la Gefatura de Hacienda obra en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1837, cuya prescripcion legal, si bien exige el requisito de la liquidacion previa, para hacer uso de la facultad coactiva, no requiere una liquidacion incontrovertible, supuesto que la misma ley prevee el evento de una contencion, cuando establece la intervencion de la autoridad judicial en los negocios de la Hacienda pública que llegan á hacerse contenciosos; por estas consideraciones, el ciudadano Juez de Distrito, declara que el presente juicio de amparo no tiene objeto, por haber quedado sin vigor ni efecto las dos órdenes conminatorias de pago expedidas sin previa liquidacion por la Jefatura de Hacienda del Estado, en diez y veintiuno de Diciembre próximo pasado. Notifíquese este fallo á las partes, y publíquese en el periódico Oficial intitulado: *La República*, remitiendo en seguida los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para los efectos legales. Así el nominado ciudadano Juez de Distrito lo decretó, mandando se prevenga al quejoso reponga con el sellado correspondiente, el papel comun de que se

ha hecho uso y firmó: doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el ciudadano Florentino Ramirez, como apoderado jurídico del presbítero José María Orihuela contra los procedimientos del Gefa de Hacienda del Estado de Guanajuato, en lo relativo al cobro que se pretende hacer por esa oficina, por medio de la facultad económico coactiva, de los réditos que han sido denunciados del capital de dos mil pesos que reconocian las casas de la propiedad del quejoso, ubicadas en el callejon de los Arcos y calle de Alonzo de esa capital. Visto el parecer fiscal de 9 de Enero del presente año, los documentos presentados en el informe con justificacion, rendido por la autoridad contra quien se ha solicitado el amparo, y lo demas que se tuvo presente y ver convino.

Considerando: Que la Gefatura de Hacienda de Guanajuato, al expedir sus órdenes de 10 y 21 de Diciembre del año próximo pasado obró en la órbita de sus atribuciones y bajo las proscripciones de la ley de 20 de Enero de 1837, que le concede la facultad económico-coactiva para hacer efectivo el cobro de los adeudos públicos.

Considerando: Que la misma ley deja al presbítero Orihuela, expedito su derecho para hacerlo valer ante la misma Gefatura de Hacienda y los tribunales, en la vía y forma que tuviesen por conveniente; con tales fundamentos, se decreta:

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juzgado de Distrito de Guanajuato pronunciada en 3 del presente mes y año, que declaró sin objeto el presente juicio, considerando sin vigor las órdenes dictadas por la Gefatura de Hacienda.

Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al presbítero D. José María Orihuela contra los procedimientos del Gefe de Hacienda de Guanajuato, á que se refiere el ocuro de amparo que ha motivado el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veinte de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Lic. Julian Torres, como apoderado del ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, contra la expropiacion decretada por la Legislatura del Estado de Zacatecas en 15 de Marzo de 1869, y sancionada por el Ejecutivo del mismo en 17 del propio mes y año.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

En 22 de Diciembre del año próximo pasado, el ciudadano Lic. Julian Torres, apoderado general del ciudadano Lic. Tomás Ignacio Robles, se ha presentado so-

licitando la proteccion y amparo de la Justicia federal, contra el decreto de la Legislatura del Estado de 15 de Marzo de 1869, que lo expropió del casco de su hacienda de la Estanzuela en el Partido de Sanchez Roman, tomándole seiscientas varas de terreno por cada viento, para fundo de la municipalidad y con arreglo á lo dispuesto en la ley de 9 de Marzo de 1868; fundando su queja, en que la expropiacion decretada y llevada á efecto, no obstante sus protestas y falta de voluntad, viola notoriamente el art. 27 de la Constitucion general, que prohíbe ocupar la propiedad de las personas sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

Pedido á la Presidencia municipal de la Estanzuela, como inmediata ejecutora del decreto reclamado el informe prevenido por el artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, lo ha rendido en 3 del corriente, limitándose á corroborar los hechos expuestos por el quejoso y á manifestar, que si se le privó de su propiedad para distribuirla entre los vecinos del municipio, fué en virtud del decreto reclamado que sancionó ese beneficio para mas de ciento cuarenta familias que forman esa poblacion nascente, y obsequiando las prevenciones superiores fundadas en una ley que en su concepto, nada tuvo de ilegal.

Con estos antecedentes que no dejan duda alguna sobre los hechos en que se funda la queja hecha en nombre del ciudadano Lic. Robles, el Promotor pasa á ocuparse de las cuestiones de derecho que ella envuelve, para concluir, que debe concederse el amparo y proteccion pedido á la justicia de la Union.

Es la primera: Que en las facultades de la Legislatura del Estado no estuvo la de decretar la expropiacion de los terrenos de la hacienda de la Estanzuela; porque estando los derechos del hombre reconocidos y garantizados por la Constitucion general, todos los hombres en la República tienen los mismos derechos ó garantías individuales, que solo pueden amplearse, restringir-